

<Castellano>

NOTA DE PRENSA

El Defensor del Pueblo vuelve a denunciar el desamparo de los jóvenes ex tutelados, suspende el contacto con la Generalitat y reitera que la Fiscalía General debe actuar

- La falta de tramitación de la residencia les provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.”, asegura Fernández Marugán
- La Campaña denunció al Defensor su encierro en el CIE y su situación de calle tras salir del centro de menores; ahora el Defensor “ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos” y “ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General”

València, 19 de enero de 2021.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha vuelto a dar traslado a la Fiscalía General del Estado de la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad: se ven obligados a abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos y sin posibilidad de obtenerlos ya que carecen de permiso de residencia y trabajo. A principios de noviembre del pasado año el Defensor ya informó a la Fiscalía de esta situación al constatar que un gran número de jóvenes ex tutelados alcanzaba la mayoría de edad sin que se les hubiera tramitado el permiso de residencia. Ahora, dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y, además, ha decidido suspender las actuaciones con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (responsable de la tutela de los menores) ante “la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa”. En su respuesta a la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones señala varias irregularidades.

En el escrito el Defensor del Pueblo reprocha la falta de tramitación de la autorización de residencia, lo que provoca “graves perjuicios, entre otros, dificultad para acceder a recursos de ex tutelados, para solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, etc.” La Conselleria señala en el informe remitido al Defensor que no pudo tramitar la autorización de residencia por no poder documentar la filiación del menor, así como por no haber transcurrido nueve meses desde que se asumió su guarda. El Defensor desmiente en este punto a la Conselleria al indicar que no se puede considerar que el menor no tuviera

documentada su filiación ya que “contaba con la pertinente identificación policial e inscripción en el Registro de menores extranjeros no acompañados, así como con decreto dictado por el Ministerio Fiscal en el procedimiento de determinación de edad incoado”. Además, constata “lo erróneo de los plazos utilizados por la Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, para instar la residencia de los menores”, contraviniendo lo indicado por el artículo 35.7 de la Ley de Extranjería. En este punto, numerosas administraciones continúan interpretando que es a partir de los nueve meses de tutela cuando deben instar a la tramitación de la autorización de residencia del menor, en base al desarrollo normativo del Reglamento de la Ley de Extranjería. Sin embargo, en su interpretación de esta normativa el Defensor del Pueblo señala que “en todo caso se otorgará la autorización transcurridos nueve meses desde dicha puesta a disposición. Por tanto, la citada normativa impone el plazo de nueve meses como un límite máximo para otorgar la residencia al menor, no como término *a quo* para presentar la solicitud”. Para ello se apoya además en el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados que establece el plazo de “tres meses desde la puesta a disposición del MENA en el Centro de protección de menores”.

Además, el Defensor vuelve a hacer referencia a la Nota Interna 1/2019 conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo que analiza la normativa y jurisprudencia aplicable a diferentes trámites a realizar por los menores extranjeros no acompañados y que ya indicó el Defensor que estaba siendo incumplida por las entidades de protección de menores. La Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas señala en el informe remitido que “el menor no estuvo bajo tutela de la entidad pública, asumiendo únicamente su guarda provisional”. Es por ello por lo que el Defensor se ve obligado a recordar el deber legal que incumbe a las entidades de protección de “declarar la tutela de los menores extranjeros no acompañados, sin prolongar la guarda de hecho más allá del tiempo necesario para su identificación y constatar su desamparo”, especificando que “los menores se encuentran desamparados cuando existe incumplimiento, o inadecuado ejercicio de los deberes de protección, estando privados de la necesaria asistencia moral o material”. Y así, la guarda provisional en tanto se constata el desamparo “no es óbice para la adopción de todas las medidas oportunas de protección, de modo especial, la de tramitar su autorización de residencia, habida cuenta de los graves perjuicios del acceso a la mayoría de edad sin ella”.

Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo “ha reiterado a la citada Conselleria el deber legal de instar a la tramitación de la autorización de residencia de los menores extranjeros no acompañados” de acuerdo con lo establecido por la Ley de Extranjería y su Reglamento. Asimismo, “se le ha dado cuenta” de lo establecido en el Código Civil en referencia a la asunción de la tutela de los menores en desamparo. Finalmente, el Defensor señala que “habida cuenta de la cantidad de menores tutelados por los servicios de protección de la Generalitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia y sin documentación identificativa, ya sea pasaporte o cédula de inscripción, se ha suspendido la actuación con los servicios de protección valencianos y se ha dado traslado de la presente cuestión a la Fiscalía General, al objeto de que se adopten las medidas previstas en la citada Nota Interna 1/2019”.

En noviembre, el Defensor del Pueblo ya informó a la Fiscalía General del Estado sobre la situación de desamparo de los jóvenes ex tutelados. La iniciativa del Defensor se produjo a raíz de las quejas presentadas por la Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin



Nota de Prensa
ciesno.wordpress.com

19 de enero de 2021

de las deportaciones en nombre de 10 de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores. Fernández Marugán notificó el pasado 6 de noviembre a la Campaña que había decidido dar traslado de este asunto “a la Fiscalía General a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes”. Dos meses más tarde, el Defensor del Pueblo reitera el traslado de la problemática a la Fiscalía General del Estado y suspende las actuaciones con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

La Campaña CIEs NO exige a las administraciones implicadas en el asunto que de manera urgente adopten las medidas necesarias para que todas las personas interesadas puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación.

Se adjunta notificación del Defensor del Pueblo.

Para más información: Adrián Vives 662378705

www.ciesno.wordpress.com

<Valencià>

NOTA DE PREMSA

El Defensor del Pueblo torna a denunciar el desempament dels joves ex tutelats, suspén el contacte amb la Generalitat i reitera que la Fiscalia General ha d'actuar

- La falta de tramitació de la residència els provoca “greus perjudicis, entre altres, dificultat per a accedir a recursos de ex tutelats, per a sol·licitar la Renda Valenciana d'Inclusió, etc.”, assegura Fernández Marugán
- La Campanya va denunciar al Defensor el seu tancament al CIE i la seua situació de carrer després d'eixir del centre de menors; ara el Defensor “ha suspés l'actuació amb els serveis de protecció valencians” i “ha donat trasllat de la present qüestió a la Fiscalia General”

València, 19 de gener de 2021.- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha tornat a donar trasllat a la Fiscalia General de l'Estat de la situació de desempament que pateixen molts menors tutelats per la Generalitat Valenciana en complir la majoria d'edat: es veuen obligats a abandonar el centre d'acollida i es queden al carrer sense recursos i sense possibilitat d'obtindre'ls ja que manquen de permís de residència i treball. A principis de novembre del passat any el Defensor ja va informar la Fiscalia d'aquesta situació en constatar que un gran nombre de joves ex tutelats arribava a la majoria d'edat sense que se'ls haguera tramitat el permís de residència. Ara, dos mesos més tard, el Defensor del Pueblo reitera la seua denúncia davant la Fiscalia General de l'Estat i, a més, ha decidit suspendre les actuacions amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (responsable de la tutela dels menors) davant “la quantitat de menors tutelats pels serveis de protecció de la Generalitat Valenciana que accedeixen a la seua majoria d'edat sense comptar amb l'autorització de residència i sense documentació identificativa”. En la seua resposta a la Campanya pel tancament dels CIEs i la fi de les deportacions assenyala diverses irregularitats.

A l'escrit, el Defensor del Pueblo critica la falta de tramitació de l'autorització de residència, la qual cosa provoca “greus perjudicis, entre altres, dificultat per a accedir a recursos de ex tutelats, per a sol·licitar la Renda Valenciana d'Inclusió, etc.” La Conselleria assenyala a l'informe remés al Defensor que no va poder tramitar l'autorització de residència per no poder documentar la filiació del menor, així com per no haver transcorregut nou mesos des que es va assumir la seua guarda. El Defensor desmenteix en aquest punt a la Conselleria en indicar que no es pot considerar que el menor no tinguera documentada la seua filiació ja que “comptava amb la pertinent identificació policial i inscripció en el Registre de menors estrangers no acompanyats, així com amb decret dictat pel Ministeri Fiscal en el procediment de determinació d'edat incoat”. A més, constata “l'error dels

terminis utilitzats per la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a instar la residència dels menors”, contravenint l'indicat per l'article 35.7 de la Llei d'Estrangeria. En aquest punt, nombroses administracions continuen interpretant que és a partir dels nou mesos de tutela quan han d'instar la tramitació de l'autorització de residència del menor, sobre la base del desenvolupament normatiu del Reglament de la Llei d'Estrangeria. No obstant això, en la seua interpretació d'aquesta normativa el Defensor del Pueblo assenyala que “en tot cas s'atorgarà l'autorització transcorreguts nou mesos des d'aquesta posada a disposició. Per tant, la citada normativa imposa el termini de nou mesos com un límit màxim per a atorgar la residència al menor, no com a terme *a quo* per a presentar la sol·licitud”. Per a això es recolza a més en el Protocol Marco de Menors Estrangers No Acompanyats que estableix el termini de “tres mesos des de la posada a disposició del MENA en el Centre de protecció de menors”.

A més, el Defensor torna a fer referència a la Nota Interna 1/2019 conjunta dels Fiscals de Sala d'Estrangeria, Menors i Contenciós Administratiu que analitza la normativa i jurisprudència aplicable a diferents tràmits a realitzar pels menors estrangers no acompanyats i que ja va indicar el Defensor que estava sent incomplida per les entitats de protecció de menors. La Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives assenyala a l'informe remés que “el menor no va estar sota tutela de l'entitat pública, assumint únicament la seua guarda provisional”. És per això que el Defensor es veu obligat a recordar el deure legal que incumbeix les entitats de protecció de “declarar la tutela dels menors estrangers no acompanyats, sense prolongar la guarda de fet més enllà del temps necessari per a la seua identificació i constatar el seu desemparament”, especificant que “els menors es troben desemparats quan existeix incompliment, o inadequat exercici dels deures de protecció, estant privats de la necessària assistència moral o material”. I així, la guarda provisional en tant es constata el desemparament “no és obstacle per a l'adopció de totes les mesures oportunes de protecció, de manera especial, la de tramitar la seua autorització de residència, tenint en compte els greus perjudicis de l'accés a la majoria d'edat sense ella”.

Per tot açò, el Defensor del Pueblo “ha reiterat a la citada Conselleria el deure legal d'instar la tramitació de l'autorització de residència dels menors estrangers no acompanyats” d'acord amb el que s'estableix per la Llei d'Estrangeria i el seu Reglament. Així mateix, “se li ha donat compte” del que s'estableix en el Codi Civil en referència a l'assumpció de la tutela dels menors en desemparament. Finalment, el Defensor assenyala que “tenint en compte la quantitat de menors tutelats pels serveis de protecció de la Generalitat Valenciana que accedeixen a la seua majoria d'edat sense comptar amb l'autorització de residència i sense documentació identificativa, ja siga passaport o cèdula d'inscripció, s'ha suspès l'actuació amb els serveis de protecció valencians i s'ha donat trasllat de la present qüestió a la Fiscalia General, a fi de que s'adopten les mesures previstes en la citada Nota Interna 1/2019”.

La Campanya CIEs NO exigeix a les administracions implicades en l'assumpte que de manera urgent adopten les mesures necessàries perquè totes les persones interessades puguin accedir tant a la documentació a la qual tenen dret com a una plaça en la Xarxa d'Emancipació per a Joves Ex Tutelats de la Comunitat Valenciana i que, així mateix, s'adopten les mesures necessàries perquè cap altre menor accedisca a la majoria d'edat sense que se li tramite el permís de residència i un recurs d'emancipació.



SER INMIGRANTE
NO ES UN DELITO

**Campaña por el
cierre de los centros
de internamiento
para extranjeros**

Nota de Prensa
ciesno.wordpress.com

19 de enero de 2021

S'adjunta notificació del Defensor del Pueblo.

Par a més informació: Adrián Vives 662378705

www.ciesno.wordpress.com